



4 de noviembre del 2003

Aumentan los gastos militares

El gobierno español transfiere recursos públicos a empresas de armamento

Tor
Rebelión

Parecería que Aznar, una vez ha decidido su retiro de la política —al menos en lo que tiene que ver directamente con el gobierno— estuviera buscando reconocimiento entre los principales poderes de nuestro flamante mundo mercantil. En los últimos tiempos, allá por donde va no para de repetir las mismas consignas: hay que aumentar los gastos militares. Lo dijo la pasada semana en su intervención en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y también lo acaba de decir en Barcelona, en unas jornadas sobre "Catalunya y la Europa del Futuro" de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES —que nadie piense en Falange Española), esta vez animando a los países europeos a "fortalecer la seguridad" continental.

¿A qué tipo de seguridad se referirá? Mucho nos tememos que el concepto de seguridad de Aznar nada tiene que ver, por no rebuscar en panfleto radical alguno, con el concepto de *seguridad humana* del PNUD [1] —... las personas deben poder cuidarse por sí mismas: todos deben tener oportunidad de satisfacer sus necesidades y de llevar a cabo en forma segura la vida que para ellos tiene valor—. La deificación de la "seguridad" aznariana se inclina más a la forma en como la entiende el gobierno del señor Bush: es la seguridad que reina en Afganistán, la que reina en Iraq, en Palestina. Es la seguridad de la *pax romana*. Es la seguridad de los ataques preventivos ante el terrorismo y la de pedir al ejército que esté preparado para cualquier circunstancia.

Estos excesos inadmisibles que llevan a la osadía de poner en primer orden la defensa del *status quo* frente a las libertades y los derechos ciudadanos tiene su faceta más cercana en la orientación del gasto público que se está materializando a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Demos tan sólo unas pinceladas que nos permitan ver con claridad de qué estamos hablando. Para 2004 el gobierno de Aznar tiene previsto seguir gastando el dinero público en nuevas adquisiciones de armamento. Junto a los cuatro programas en curso (Eurofighter 2000, Fragatas F-100, Tanques Leopard y Aviones A-400M), con un coste total de 14.322 millones de euros (m.de e.), se incorporan ahora cinco nuevos programas (Helicópteros Tigre, Vehículos Pizarro, Misiles, Submarino S-80 y Buque Polivalente) con un coste inicial de 4.226 m.de e. Estos grandes programas de armamento suponen un compromiso de gasto para los próximos 15 años de más de 20.000 m.de e. El Secretario de Estado para la Defensa, Díez Moreno, en la *Comisión de Defensa* de 8 de octubre de 2003 comparte con Aznar su concepto de seguridad: "... estamos haciendo, como se dice en términos presupuestarios, que cada generación pague por lo que utiliza". Tenemos la seguridad de portar un pesado fardo con esta política militarista y despilfarradora, sobre todo a partir de 2007, cuando se dejen de recibir los Fondos Estructurales de la UE.

Estos programas reciben el dinero del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT), al considerar como Investigación más Desarrollo (I+D) un alto porcentaje para su posterior producción. En

teoría, se financian mediante créditos reembolsables a devolver sin intereses. Sin embargo, y por lo que podemos deducir de las intervenciones en las comisiones del Congreso se puede afirmar que el objetivo es condonar la deuda a nivel interministerial —esto es, considerar el dinero del MCYT no cómo un préstamo a devolver sino como una subvención—. El procedimiento consiste en hacer que Defensa se subroge el pago que deberían hacer las empresas que desarrollan estos proyectos —entre otras el Consorcio CEDIEF (EADS-CASA e ITP), IZAR Construcciones navales SA, Santa Bárbara Sistemas SA, SENER, Indra, SAPA Plasencia y GAMESA. Una vez liberadas estas del compromiso de pago, el Ministerio conseguiría un pacto entre el MCYT, el de Economía y el de Hacienda para condonar interministerialmente esta deuda. Sólo en partidas destinadas a I+D militar, los PGE destinarán este año la friolera de 1.373 m.de e. [2]

Otra pincelada, muy relacionada con la anterior, tiene que ver con la venta del patrimonio público. Lo que concierne a multitud de propiedades en forma de terrenos, viviendas, locales, garajes, solares y fincas rústicas que, por la reorganización militar, han dejado de tener interés infraestructural, ha pasado a tener interés económico estratégico para la llamada "defensa nacional".

En 1984 se creó la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos para la Defensa —GIED— con el objetivo de deshacerse de la forma más ventajosa posible de las innumerables propiedades de Defensa —que en su día fueron enajenadas a los municipios renunciando además a su posterior devolución si los fines por los que se consumaba la desposesión dejaban de estar vigentes. Los sucesivos gobiernos socialistas entre 1984 y 1996 subastaron, vendieron o permutaron cuarteles en desuso por un importe total de 600 m.de e. —según se desprende de los datos de la GIED—.

Ahora el Partido Popular, con la excusa de necesitar dinero para sufragar los costosos programas de armamento señalados, está siguiendo las directrices de dos consultoras privadas especializadas en la especulación. Estas han considerado que se podrían vender inmuebles y terrenos por mucho más dinero. Para ello, es necesario cambiar la legislación, pues actualmente se recae en un proceso lento y "excesivamente burocrático" que "el mercado muchas veces no entiende". Por esta razón, se quiere modificar la Ley de Patrimonio, que deja manos libres a Defensa y a la GIED para poder especular sin tanta "maraña burocrática". Si se aprueba la reforma de esta Ley se dejará vía libre a la GIED y al propio Ministerio de Defensa para que regulen a su antojo las propiedades de Defensa.

Estando como está el mercado inmobiliario, que hasta la UE está recomendando al gobierno una actuación urgente en esta materia [3], ¿cómo se entiende que el gobierno español se esté dedicando a especular en vez de a solucionar este problema?

El sistema de venta por subasta favorece la especulación. Es evidente que quien compra el terreno lo va a vender por un precio mayor para obtener plusvalor. Como este último, el constructor y el promotor, harán exactamente lo mismo. Quienes saldrán gravemente perjudicados serán aquellos que se decidan a adquirir una vivienda, pues tendrán que dedicar más del 60% de su renta.

Las propiedades militares se encuentran en las zonas de ensanche de las ciudades y se han convertido en "islas" de suelo libre rodeadas de zonas congestionadas. Son balones de oxígeno para los especuladores, provengan estos del sector privado o de los gobiernos —municipales o autonómicos—. *La oferta de suelo del Ministerio para edificar "es hoy extraordinariamente importante (...) hasta el punto que, de ponerse a la venta de forma simultánea, podría «romper» el precio actual del suelo en las grandes ciudades y alterar los planes de urbanismo"* [4].

En 2003 el Ministerio de Defensa habrá puesto en venta 1.160.766 m² y obtendrá como mínimo unos 220 m.de e. Sólo durante el mes de noviembre Defensa subastará terrenos valorados en 64,2 m.de e. Las propiedades están situadas en Valladolid, Alcorcón (Madrid), Ferrol (A Coruña) y Lugo, y suman 192.656 m², una extensión similar a la que ocuparían más de 30 estadios de fútbol [5].

Es cierto que estas partidas no suponen ingresos suficientes para cubrir los gastos de los programas de armamento. Los programas militares no se van a sufragar con las ventas de terreno: lo vamos a sufragar a través del erario público. Para el año 2004, el gasto militar del Estado español ascenderá a 18.555 m.de e., o lo que es lo mismo, un 2,42% del Producto Interior Bruto, con un peso sobre el conjunto del gasto de los PGE del 11,82% [6].

La seguridad así entendida se torna un problema de primer orden. No queremos la seguridad que Aznar nos propone; más bien, deberíamos defendernos de Aznar, lo que a buen seguro, nos proporcionaría una revitalizante sensación de seguridad.

Este gobierno militarista, que transfiere recursos públicos a las empresas de armamento hasta configurarlas como el verdadero tejido industrial español, es un despropósito que hay que impugnar más pronto que tarde. Lo mismo le vale contabilizar como Ayuda Oficial al Desarrollo 16 m.de e. sobre la partida de la participación militar española en la guerra de Iraq [7] que utilizar al director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para que participe junto al secretario de Estado de Defensa y comisionado del Gobierno español para Iraq, Fernando Díez Moreno, y el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Dov Zakhein, en la recluta de soldados centroamericanos para enviarlos a Iraq a cambio de la condonación de la deuda que Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana tienen contraída con el Estado español. Lo mismo le da comprar 24 helicópteros "Tigre" al consorcio europeo Eurocopter [8] —en vez de los ya previstos helicópteros "Apache" norteamericanos— para tender puentes entre Bush y el gobierno francés y convencer a estos de lo rentable que puede ser invertir en Iraq [9], que exportar armas en 2002 por valor de 356,11 m.de e.

Las orientaciones del gasto tienen que ver con los dictados de la Europa del capital y con nuestra pertenencia a todas las estructuras militares existentes —europeas, atlánticas, bilaterales y multilaterales—. Impugnar este modelo de sociedad militarizada que nos intentan vender como el mejor de los mundos posibles pasa por cuestionarse todo esto en su conjunto.

Si nos proponemos desvelar y denunciar estas injusticias que se operan, también con nuestro beneplácito —con nuestros impuestos se pagan los programas de armamento; multitud de bancos, cajas de ahorro y empresas en las que tenemos metido dinero y/o compradas acciones favorecen o forman parte de la industria militar; trabajamos en la industria militar o pertenecemos a sindicatos que se vanaglorian de los puestos de trabajo que se generan en estas empresas, pasando por alto, no sólo lo dicho a lo largo de este texto, sino el hecho bastante seguro de que lo producido se utilizará en algún conflicto del mundo—, iremos avanzando en esa sociedad más segura, libre, autodeterminada y ecológicamente sostenible que Aznar tanto deplora.

En definitiva. No paguemos las guerras, para no tener que pararlas. Hagámoslas imposibles.

Notas:

[1] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

[2] Para comparar lo gastado en I+D militar en relación a I+D civil, consultar el trabajo de la Fundació per la Pau en

http://www.prouinvestigaciomilitar.org/documents/informes/InformeI_Dmilitar_2004cast.pdf

[3] Ver "Bruselas advierte sobre el peligro de una burbuja inmobiliaria en el Estado español" en <http://www.gara.net/index.php>

[4] *La Razón*, 11 de septiembre de 2003.

[5] *5Días*, 29 de octubre de 2003.

[6] Para ver pormenorizadamente el gasto militar de 2004, acudir a

<http://www.lahaine.org/global/gm04.pdf>

[7] El coste total para 2003 de la participación del ejército español en la ilegítima e ilegal

ocupación de Iraq está previsto que sea de 170 millones de euros -17,9 m. de e. en la primera fase y la previsión de 153 en la segunda. "*Estimación del coste de la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en Irak*", en la Sesión plenaria número 264 de las CORTES GENERALES celebrada el 17 de septiembre de 2003.

[8] Que nos costarán 1.353 m.de e.

[9] "Aznar, con el 'visto bueno' de Bush, apostó por el helicóptero 'TIGRE' para hacerle un guiño a Francia", en *elconfidencial.com*, 11 de septiembre de 2003.

[Envía esta noticia](#)

